

Competencia del jurado popular ¿Derecho del imputado o atribución del acusador?

Por Manuel Ignacio Islas

Resumen: *En el presente realizo un estudio de la jurisprudencia del TSJ de Neuquén respecto a la competencia del jurado popular dando respuesta al interrogante que motiva el artículo a partir de la normativa vigente y el análisis comparativo de los modelos neuquino y bonaerense.*

Palabras clave: Jurado Popular – Competencia

Introducción

El interrogante que motiva este trabajo nació fruto de mi recorrido profesional en dos provincias pioneras en la República Argentina en orden a la consagración e implementación del juicio por jurados.

Por un lado, Buenos Aires, en la cual la competencia del jurado popular para intervenir en un caso concreto pareciera ser un derecho del imputado, y por otra parte Neuquén, donde pareciera ser una facultad del acusador público.

Y enfatizo el término pareciera porque a veces lo que parece ser no es, sobre todo en

cuestiones jurídicas, siempre abiertas a renovadas interpretaciones como la que se intentará sostener en este trabajo sin ninguna pretensión de originalidad, sino más bien observando la cuestión desde la Constitución Nacional.

Estructura

Este ensayo tiene tres partes. En la primera analizaré someramente la competencia del jurado popular en el sistema procesal neuquino a la luz de la jurisprudencia más reciente del Tribunal Superior de Justicia en el caso “Duarte” y la segunda sobrevolaré la legislación bonaerense interpretándola a la luz de la voluntad del legislador consagrada en la exposición de motivos de la ley 14.543.

Por último y para concluir contrastaré estos dos modelos dispares a la luz de la ley Fundamental y desde ahí construiré mi conclusión que desde ya adelanto es diversa a las dos alternativas que ofrece el interrogante capcioso de inicio.

El modelo neuquino

La sala penal del Tribunal Superior de Justicia Neuquino dictó el 13 de abril de 2021 la Resolución interlocutoria Nro. 21 se pronunció sobre el punto de la competencia del jurado popular emitiendo un valioso precedente a nivel local.

En el caso el cimero Tribunal Provincial declaró la nulidad de una decisión adoptada por un juez de garantías del Colegio de Jueces de la I circunscripción, en una audiencia de control de la acusación celebrada el día 3 de febrero de 2021, únicamente en lo relativo a la fijación de la competencia de juzgamiento mediante un Tribunal Colegiado y declaró la competencia del Jurado Popular para el juzgamiento de los hechos del caso

En esa audiencia el acusador público señaló en lo que resulta de interés que, frente a la multiplicidad y gravedad de los hechos atribuidos, su pretensión punitiva será mayor a quince años de prisión y en consecuencia solicitó la fijación de competencia del Jurado Popular (conf. art. 35 del C.P.P.N.); pretensión que a su vez mereció el acompañamiento de las otras partes acusadoras.

Vale recordar para ilustrar que la calificación legal de los hechos para ambos imputados fue abuso sexual con acceso carnal reiterados doblemente agravados por ser cometidos contra menores de 18 años de edad aprovechando la convivencia preexistente y por ser cometido por dos personas -cfr 119, 1er, 3er. y 4to. Párrafos incisos d y f del Código Penal.

El juez de garantías que intervino en esa audiencia –previa vista a la Defensa que se opuso a la pretensión fiscal- denegó la competencia del jurado popular solicitada por las partes acusadoras –Fiscalía, querrela institucional y particular- atribuyéndola en su lugar a un tribunal compuesto por jueces técnicos, bajo el argumento de que el Fiscal no dio razones suficientes que permitan proyectar una pena de tamaño intensidad para los imputados.

Disconformes con ese punto de la decisión, las acusadoras dedujeron impugnación ordinaria, la que fue declarada formalmente inadmisibles, por el Tribunal de Impugnación el 19 de febrero de 2021.

Denegatoria que motivo la interposición de un recurso de Queja directo ante el TSJ por impugnación ordinaria denegada.

Señala la Sala que “...la consulta de estas actuaciones permite advertir un grave vicio como el señalado, al haberse afectado la

competencia establecida en la Ley vigente. En efecto: El artículo 25 del

C.P.P.N. indica como principio indefectible, que “La competencia sólo puede ser fijada por la ley”, lo que implica -al menos como regla general- que no puede ser alterada por los jueces ni por las partes.

Bajo esta premisa normativa, la distribución de la competencia entre los distintos magistrados o tribunales y jurados opera conforme a factores determinantes de competencia, sustentado en pautas preestablecidas, lo que en nuestro Código Adjetivo se aprecia en el Libro I, Título II, Capítulo II bajo el título “Tribunales Competentes” (cfr. en especial arts.31 a 37 del C.P.P.N.).

En lo que aquí interesa y con particular foco en el artículo 35 de nuestro Rito, el Legislador previó la intervención obligatoria de Tribunales de jurados populares “Cuando se deba juzgar delitos contra las personas, la integridad sexual o cualquier otro delito cuyo resultado haya sido muerte o lesiones gravísimas, siempre que el Ministerio Público Fiscal solicite una pena privativa de la libertad superior a los quince (15) años.

Vale indicar aquí que no estuvo en discusión ante el magistrado la existencia de los elementos objetivos requeridos por la norma procesal para la sustanciación del juicio por jurados populares y que la intención del Legislador traduce, esencialmente, “...el derecho a juzgar en cabeza del pueblo, por considerarlo el sujeto más apto para ponderar la criminalidad de las acciones u omisiones del prójimo”, a la vez que el veredicto alcanzado por ese órgano constituye “...una conclusión que se asume luego de transitar un proceso deliberativo forjado por una pluralidad de opiniones que expresan apreciaciones en las que se congregan la multiplicidad de género, edades,

oficios, experiencias de vida, etc. [...] El ejercicio deliberativo previo a la toma de decisiones relevantes -como el veredicto del jurado popular- posee un efecto positivo para todos los participantes. En esa línea, se puede hablar de “valor epistemológico” de la construcción de consensos [...] La proyección multiplicadora de esta experiencia de aprendizaje derrama sus beneficios sobre la comunidad, permitiendo „generar ciudadanía“...” (cfr. C.S.J.N., Fallos342:697, “Canales, Mariano Eduardo y otros s/ Homicidio Agravado”, del voto de mayoría, considerandos 17 y 20).

Señalo la Sala Penal que el juez de garantías, al margen de la norma y desatendiendo la alta misión que el Legislador depositó en el Jurado Popular, le impidió su competencia natural al expresar: “...no encuentro elementos que me hagan suponer que en el caso concreto se pueda dictar una pena superior a los 15 años de prisión, siendo que la mínima es 8 años...”.

Dicho argumento no es validable ya que no le cabía formular una graduación anticipada de la pena como pauta de asignación de competencia, a menos de que la petición Fiscal resultara manifiestamente ilógica.

Ello así, pues se encontraba fuera de sus posibilidades prever con meridiana claridad las muy diversas circunstancias que habrían de influir sobre el agravamiento o la atenuación de la sanción penal en la potencial fase de cesura, porque todavía no se litigaron ni las conoce en toda su dimensión. Ese método de asignación, además de tener una evidente endeblez, no tiene anclaje en ninguna norma procesal o pauta interpretativa, de la cual tampoco se ocupó de explicar en su fallo.

Por el contrario, de forma más limitada, se le imponía controlar que la pretensión fiscal no resulte irrazonable en el caso en concreto. Y esta comprobación queda cumplida con constatar que las conductas penalmente relevantes resulten abarcadas en el artículo 35 del Código Procesal Penal y que contengan, en abstracto, una intensidad punitiva que haga sostenible la pretensión sancionatoria del Fiscal.

Eso es, en definitiva, el control de razonabilidad que le cabía efectuar en los términos del artículo 173 inc. “a” del C.P.P.N., del cual se alejó sin argumentos eficaces. Se insiste una vez más: el legislador local, en el diseño de competencias que estableció en el Título II del Código Procesal Penal, dispuso la intervención, de modo obligatorio, de jurados populares, cuando el Ministerio Público Fiscal requiriese una pena privativa de libertad superior a los quince años en orden a los delitos contra las personas, la integridad sexual o cualquier otro delito cuyo resultado sea muerte o lesiones gravísimas (cfr. art. 35); hallándose tales requisitos presentes en el legajo.

Entonces la jurisprudencia actual de la máxima instancia judicial Neuquina entiende que la delimitación de la competencia del jurado popular se habilita cuando el Fiscal del Caso señala que en el caso requerirá una pena privativa de libertad que en abstracto sea superior a los quince años de prisión en cierto tipo de hechos -los delitos contra las personas, la integridad sexual o cualquier otro delito cuyo resultado sea muerte o lesiones gravísimas- lo que en buen romance significa que es una facultad o atribución del Fiscal delimitar en qué casos interviene un jurado popular y en cual no, y salvo irrazonabilidad manifiesta de la pretensión del acusador público los jueces de garantías no pueden inmiscuirse en el ejercicio de tal atribución o

mejor dicho el control judicial se activa solamente si la pretensión fiscal es manifiestamente irrazonable.

El modelo bonaerense

En el modelo bonaerense a diferencia del Neuquino el fiscal propone la competencia del jurado popular, pero el imputado dispone pudiendo renunciar a este modo particular de enjuiciamiento.

En la práctica funciona así: en la requisitoria de elevación a juicio del art 334 y 335 del Código Procesal Penal Bonaerense el Agente fiscal consigna en algún acápite del escrito que por la naturaleza del caso – hecho y calificación- a la luz del art. 22 bis del Rito entiende que podría intervenir un jurado popular en el juzgamiento y la defensa junto al imputado al corrersele trasladado de este requerimiento tiene derecho a renunciar a esta modalidad de juzgamiento.

En los fundamentos del proyecto de ley 14543 el legislador señaló expresamente “... El establecimiento del juicio por jurados es entendido en el presente proyecto como un derecho del imputado, que como tal resulta enteramente renunciable. Por ello, no solo se mantiene la posibilidad de que el imputado junto a su defensor acuerden la abreviación del juicio, sino que, a la vez, se le reconoce la posibilidad de requerir el juzgamiento por medio del Tribunal en lo Criminal.

De esta manera, la presente regulación concede una herramienta más para el diseño de las estrategias procesales de defensa, contribuyendo así a garantizar dos principios básicos del proceso penal, como son la eficiencia sin que ello traiga ínsito la condena de inocentes.

En este sentido, ha de tenerse en cuenta que, si bien el juicio por jurados es el modo para asegurar la participación ciudadana y el

control republicano sobre los actos de gobierno del Poder Judicial, no es menos cierto que desde su nacimiento con la Carta Magna de Inglaterra de 1.215, el juicio por jurados surgió como una garantía del imputado a ser juzgado por sus pares - judgment by peers-.”

En resumidas cuentas, entonces, para legislador bonaerense ser juzgado por jurado popular es un derecho renunciable del imputado.

Crítica. Conclusión

Del somero recorrido por estos dos modelos provinciales dispares en orden a la delimitación de la competencia para la intervención en juicio de un jurado popular, se advierte una aparente disyuntiva o falsa antinomia que orbita sobre si es una facultad del fiscal o un derecho del imputado

Tales alternativas no me resultan acertadas ni correctas desde un punto de vista constitucional y además porque ambas se nutren por parte de los operadores concretos que se inclinan por la decisión de la intervención de un jurado popular o la renuncian de motivaciones imprecisas y difusas – “política criminal”, “razones estratégicas” que dicen algo pero no dicen nada o más bien esconden visiones probabilísticas prejuiciosas, sesgadas y/o intuitivas respecto una eventual decisión favorable al interés de la parte respecto a lo que tal vez dirá un jurado o bien un tribunal técnico-.

Por ello decidí explorar una tercera vía a partir de lo que dice la ley suprema y entonces tengo para mí que la competencia para ser juzgado por un jurado popular no es ni una facultad del fiscal ni un derecho del acusado, sino que es un imperativo constitucional -24, 75 inc. 12 y 118 de la CN-.

El constituyente originario fue sabio al plasmar en el preámbulo allá por el 1853 que unos de los propósitos de la naciente unión nacional era "...afianzar la justicia..." Para lograr ese propósito entendió y así lo consagró en tres oportunidades que el modelo de juzgamiento más adecuado para resolver los casos penales es el juicio por jurados.

Esta clara decisión de ningún modo improvisada fue un mandato plasmado claramente en la Constitución Nacional inobservado durante aproximadamente un siglo y medio.

Distintas estrategias conservadoras antijuradistas contribuyeron con bastante eficiencia a relativizar y/o debilitar este claro mandato constitucional. Por ejemplo, esa distinción aparentemente baladí creada por algunos constitucionalistas entre cláusula constitucional operativa o programática, las primeras vigentes y aplicables per se las segundas que requieren de una ley del congreso fue quizá una categorización teórica muy eficaz utilizada para debilitar y/o relativizar la vigencia de un mandato constitucional claro.

Tan eficiente fue la táctica que recién hace menos de una década ese imperativo constitucional fue oído por la mayoría de las provincias para la implementación de este modelo constitucional de juzgamiento – acusatorio con una dinámica verdaderamente adversarial- en la que tuvieron una gravitación fundamental asociaciones intermedias de juristas de todos los rincones de país que visibilizaron esta situación realizando un aporte sustantivo para el cambio en clave constitucional y juradista, la academia, revistas especializadas, colegios profesionales y algún que otro libre pensador.

El juicio por jurados es sin duda una expresión soberana del pueblo –plural y

democrático- que participa en la administración de justicia penal, adoptando una de las decisiones más trascendentes en una república como lo es emitir un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad respecto de un par acusado de la comisión de un delito, imaginada por el constituyente como un modo posible de afianzar la justicia y consolidar la paz como dos valores fundamentales sobre los que se estructuró la unión nacional. Honremos tal imperativo constitucional.